



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA N°46219/2022

Autos: “GEODIS WILSON ARGENTINA S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _____, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN FANTINI DIJO:

GEODIS WILSON ARGENTINA S.A apela la Resolución 2021-2490-E AFIP-DEIMPR#SDGTLSS que no hace lugar a la impugnación y confirma la deuda determinada por la aplicación del Decreto 814/2001, periodos 5/2013 a 07/2019. Contribuciones- por la suma de \$8131199,54, Intereses Resarcitorios calculados al 20/2/2020 por un importe de \$8867416,29 y multa por \$6440810,72 (conf. Art. 16 de la Resolución General N°1566 (AFIP) –texto sustituido en 2010-.

La recurrente no efectúa el depósito previo de las sumas cuestionadas, (conf. lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 18820), empero póliza de seguro de caución extendida por Aseguradora Allianz por \$31500000.

Atento las constancias de autos, la envergadura del monto debatido y el seguro adjunto, considerado un sucedáneo valido del recaudo del depósito previo, (conf. criterio Alto Tribunal “ Origenes AFJP S.A. C/ Administración Federal de Ingresos Públicos, sent del 04/11/2008), se habilita la instancia y se analiza el recurso impetrado.

Considera el recurrente que la cuestión litigiosa se centra en determinar el monto máximo de facturación que debe considerarse para que un contribuyente pueda gozar del beneficio de reducción de Contribuciones Patronales con destino al Sistema Unico de Seguridad Social previsto en el art. 2 inc b) del Dec, 814/01 y art. 1 del Dec. 1009/2001 vigentes ambos durante los periodos fiscales reclamados. Peticiona la inconstitucionalidad de la Res. General AFIP 1095/2001 en tanto la reducción de las contribuciones debe definirse exclusivamente según los montos definidos por las diferentes resoluciones posteriores de la SEPYME en las cuales se fueron adecuando los montos atento el contexto inflacionario imperante en el país (Resoluciones 21/2010, 50/2013, 357/2015, 13/2016, 103/2017, 340/2017, 154/2018, 220/2019) . En consecuencia, también solicita se declare inaplicable la multa.

La AFIP sostiene que para ser considerado Pequeño o Mediano Contribuyente, debe ajustarse la facturación al monto máximo de \$48.000.000. Además analiza lo dispuesto por el Decreto N° 814/2001, el Decreto N° 1009/01, la Resolución General N° 1095/01.

Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37087648#355759533#20230403140053414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Afirma que mientras el Decreto N° 814/01 fija las alícuotas de contribuciones patronales, el Decreto N° 1009/01 reglamenta esa disposición (estableciendo los requisitos de aplicación y remitiendo a la Resolución SPyME N° 24/01 sólo para definir los sectores abarcados y la forma de cálculo de sus ventas totales anuales); mientras que la Resolución General N° 1095/01 recepta ambos decretos a fin de reglar la conducta que deben adoptar los contribuyentes ante el Organismo para el ingreso de las contribuciones.

Señala que las Leyes N° 24.467 y N° 25.300 son las que establecen, respectivamente, el marco regulatorio y de fomento de las PyMEs. Sin embargo, ninguna de ellas define el concepto de PyME, limitándose a encomendar esa tarea a la autoridad de aplicación.

Con ese fin, la Resolución SPyME N° 24/01 clasifica a las empresas según su tipo de actividad (entre ellas, servicios y comercio), define el concepto de “ventas totales anuales”, establece parámetros de cálculo de esas ventas y fija sus montos máximos (que luego fueron elevados por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06).

Afirma que el concepto de PyME “a los efectos la determinación de la alícuota de contribuciones patronales” es el que surge del Decreto N°1009/01. No existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01.

En síntesis, sostiene, salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-, el Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la Resolución SPyME N° 24/01 por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN.

En consecuencia, visto las actuaciones administrativas, corresponde hacer la siguiente evaluación:

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013 , 357/2015 , 11/2016 ,103/2017,154/2018 220/2019 y mod, que correspondan al periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala I Expte. 99680/2012/1/RH1 “Cooperativa Eléctrica Lujanense Ltda c/ Administración Federal de Ingresos Públicos”, Sala II Expte 19649/2020 “Guardian SRL c/ AFIP S/ Impugnación de Deuda” sentencia del 14/11/2022, Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2, y CSJN Expte. CSS 93739/2011/1/RH1 y Otros SOS SA c/ Administración Federal de Ingresos Públicos” sentencia del 12 de diciembre de 2017, causa en la que dejó firme por aplicación del art. 280 CPCCN una decena de Fallos de esta Cámara, entre otros tanto fallos del Máximo Tribunal en donde se reitera es postura de modo reiterado en casos similares).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27430. Asimismo, la [Ley 27541](#) vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

Ello así el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo de cargo. Revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

Así lo señalado, es abstracto pronunciarse sobre el resto de los agravios.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al organismo, conforme art. 68CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

En cuanto a la regulación de los honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (voto del Dr. Carlos S. Fayt) (CSJN T. 315 , P. 1620).

En consecuencia, se tomara en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255 CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018).

Se propicia regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$3.119.750 –tres millones ciento diecinueve mil setecientos cincuenta pesos- (valor UMA 12.479 conf. Acordada 03/2023).

Por lo señalado, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$3.119.750 –tres millones ciento diecinueve mil setecientos cincuenta pesos- (valor UMA 12.479 conf. Acordada 03/2023), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.03, Fallos 316,1533). Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27423.

EL DOCTOR WALTER CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

En autos la empresa GEODIS WILSON ARGENTINA SA cuestiona la Resolución Administrativa 2490-E-2021 del 04/10/2021 en cuanto, al rechazar un anterior cuestionamiento, confirma la existencia de deuda por lo que considera una incorrecta aplicación de la alícuota prevista en el Decreto 814/01 para el cálculo de contribuciones a la Seguridad Social durante los periodos 05/2013 a 07/2019 por la suma de \$ 8.131.199,54 en concepto de capital, \$ 8.867.416,29 por intereses y una multa de \$ 6.444.080,72 fundada en los términos del artículo 16 de la RG 1566.

Si bien comparto la propuesta de mi distinguido colega de Sala en cuanto a la habilitación de la presente instancia dado que el interesado, efectivamente, constituyo un seguro de caución mediante Póliza N° 220240313802 extendida por Allianz Argentina Compañía de Seguros SA por la suma de \$ 31.500.000 que resulta suficiente garantía del crédito reclamado, debo disentir en cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento.

Fecha de firma: 02/05/2023

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37087648#355759533#20230403140053414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En su memorial de agravios la apelante expresa que GEODIS WILSON ARGENTINA SA es una empresa dedicada al transporte y logística. Refiere que a la luz de los principios constitucionales de legalidad y razonabilidad es totalmente improcedente la pretensión del fisco al limitar la aplicación del beneficio de reducción de contribuciones al monto establecido por la Resolución General de AFIP 1.095/2001, cuando a su juicio, debió considerar como tope de ganancias, los montos actualizados que surgen de las distintas resoluciones de la SEPyME para las empresas dedicadas al comercio. Cuestiona asimismo la impugnante los intereses aplicados y la multa impuesta.

En cuanto al fondo de la cuestión sometida a juzgamiento, no advierto que la impugnación formulada resulte viable.

Sobre el tema ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar las parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2° del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y/o prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2° inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

La parte actora en su escrito de impugnación insiste en que siendo su actividad el comercio, el criterio seguido por su parte para la liquidación de las contribuciones no es en modo alguno antojadizo, sino que, según se desprende de la certificación contable acompañada, GWA nunca superó, durante los periodos fiscales reclamados, el tope de facturación establecido por la SEPyME para Empresas Medianas.

A su juicio la conducta asumida por el organismo, al determinar la deuda que reclama, parte de una interpretación caprichosa al establecer un monto fijo sin actualización y sin tener en cuenta las particularidades de la economía argentina. Por último, solicita se la exima del pago de intereses y de la multa pretendida, pues entiende que al no deberse capital tampoco se debe interés alguno.

Con respecto a la multa refiere que para la aplicación de ésta es necesario que se acredite el acontecimiento de un hecho antijurídico y culpable, extremo que en el caso no aconteció. Es





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

más, en su opinión su comportamiento no puede ser tachado de culpable ni negligente dado que su parte efectuó el cálculo de las contribuciones patronales conforme lo indica la normativa que entiende aplicable, ingresándolas en su totalidad en tiempo y forma.

No puedo compartir tal aseveración, ello pues en lo referente a los intereses resarcitorios, cabe recordar que los mismos responden a una imposición legal (art.37 de la Ley 11.683) e importan una necesaria consecuencia por el atraso del deudor en el pago de una obligación pecuniaria o parte de ella, correspondiendo los mismos desde el vencimiento de la obligación y hasta su efectivo pago.

En lo relativo a la multa impuesta, dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”) no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Por último y con respecto a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte de la parte actora en 10 UMA (\$124.790) y los correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada en 15 UMA (\$ 187.185) CSJN Ac. 03/2023, respectivamente.

En definitiva, propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 10 UMA (\$ 124.790) y en 15 UMA (\$ 187.185) los emolumentos correspondientes a la representación letrada de la parte demandada.

A mérito de lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal **RESUELVE**: 1) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. 2) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$3.119.750 –tres millones ciento diecinueve mil setecientos cincuenta pesos- (valor UMA 12.479 conf. Acordada 03/2023), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.03, Fallos 316,1533). Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27423. Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Ante mí: AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

